



**TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUNYA**  
**SALA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA**  
**SECCIÓN TERCERA**

VIA LAIETANA, 56, 2A. PLANTA  
08003 BARCELONA  
933440030

**D<sup>a</sup>/D. M<sup>a</sup> DOLORES GÓMEZ MOVELLÁN Secretaria/o Judicial** de la Sección 3<sup>a</sup>  
de la SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR  
DE JUSTICIA DE CATALUNYA.

DOY FÉ Y CERTIFICO: Que en el RECURSO ORDINARIO (LEY 1998) **núm.:**  
384/2008, se ha dictado **Sentencia**, que es firme , del tenor literal siguiente:



**TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA**  
**SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO**  
**Sección Tercera**

**Recurso número 384/2008**

**POUM de Manlleu**

Demandante: José Colom Martí

Demandados: Departamento de Política Territorial y Obras Públicas de la  
Generalitat de Cataluña y Ayuntamiento de Manlleu

**S E N T E N C I A   núm.   453**

Il'tmo/a Sres/a Magistrados/a:

D. Manuel Táboas Bentanachs

Dña. Isabel Hernández Pascual

D. Eduardo Rodríguez Laplaza

Barcelona, veintinueve de julio de dos mil catorce.

Visto por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el presente recurso contencioso administrativo, seguido contra los acuerdos de la Comisión Territorial de Urbanismo de Barcelona de 15 de noviembre de 2007 y de 30 de abril de 2008, por los que, respectivamente, se aprobó definitivamente el Plan de Ordenación Urbanística **(POUM) de Manlleu**, y se dio conformidad al Texto Refundido del referido POUM, publicados en el DOGC número 5174, de 16 de julio de 2008, entre partes: como parte demandante, D. José Colom Martí, representado por la procuradora Dña. Emma Nel·lo Jover; como parte demandada, el Departamento de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Manlleu, representados por el letrado de la Generalitat de Cataluña y el procurador D. Ángel Quemada Ruiz, respectivamente.

En la tramitación de los presentes autos se han observado las prescripciones legales, siendo Ponente la Ilma. Sra. Magistrada Dña. Isabel Hernández Pascual.

## **ANTECEDENTES DE HECHO**

1.- El presente recurso contencioso-administrativo se ha interpuesto contra los acuerdos de la Comisión Territorial de Urbanismo de Barcelona de 15 de noviembre de 2007 y de 30 de abril de 2008, por los que, respectivamente, se aprobó definitivamente el Plan de Ordenación Urbanística (POUM) de Manlleu, y se dio conformidad al Texto Refundido del referido POUM, publicados en el DOGC número 5174, de 16 de julio de 2008.

2.- Por la representación procesal de la parte actora se interpuso el presente recurso contencioso administrativo, y admitido a trámite y recibido el expediente administrativo le fue entregado y dedujo escrito de demanda, en el que

tras consignar los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación, terminó solicitando que se dictara Sentencia estimatoria de la demanda articulada.

3.- Conferido traslado a las partes demandadas, éstas contestaron la demanda mediante escritos, en los que tras consignar los hechos y fundamentos de derecho que estimaron de aplicación, solicitaron la desestimación de las pretensiones de la parte actora.

4.- Recibidos los autos a prueba, se practicaron las pertinentes con el resultado que obra en autos. Se continuó el proceso por el trámite de conclusiones sucintas y, finalmente, se señaló día y hora para votación y fallo, que ha tenido lugar el día 1 de julio de 2014.

## FUNDAMENTOS DE DERECHO

**PRIMERO.-** El presente recurso contencioso administrativo tiene por objeto la pretensión actora de que se dicte sentencia declarando la nulidad de los acuerdos de la Comisión Territorial de Urbanismo de Barcelona de 15 de noviembre de 2007 y de 30 de abril de 2008, por los que, respectivamente, se aprobó definitivamente el Plan de Ordenación Urbanística (POUM) de Manlleu, y se dio conformidad al Texto Refundido del referido POUM, publicados en el DOGC número 5174, de 16 de julio de 2008, o subsidiariamente, declarando la nulidad de la delimitación del Sector PPU-4, "El Pont Est", con expresa condena en costas a la Administración autonómica demandada.

**SEGUNDO.-** El POUM de Manlleu fue aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento de ese municipio en sesión plenaria de 26 de junio de 2007, habiendo tenido entrada en el registro de la Dirección General de Urbanismo del Departamento de Política Territorial y Urbanismo de la Generalitat de Cataluña el

25 de julio de 2007 - registro al folio 2668 del expediente -, por lo que, por aplicación de lo dispuesto en la Disposición Tercera a) del Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio, que aprobó el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Cataluña, el POUM impugnado se rige por este último Texto Refundido en la redacción que tenía a esa última fecha.

**TERCERO.-** La parte actora pretende que se declare la nulidad del POUM de Manlleu por los siguientes motivos:

- a) La evaluación económica del POUM es insuficiente por un cálculo superficial de los costes de urbanización y por prescindir del cálculo del precio y posible beneficio de la promoción inmobiliaria de los sectores y ámbitos que delimita, no justificando la viabilidad económica del POUM, con infracción de los artículos 59 1 e) del Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio, y 76.3 del Decreto 305/2006, de 18 de julio, por el que se aprobó el Reglamento de la Ley de Urbanismo.
- b) Omisión del preceptivo informe de inundabilidad, a pesar del evidente riesgo de inundación del municipio, con infracción de los artículos 9.2 y 58 c) del Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio, y Disposición Transitoria 2ª y artículos 6, 69.2 b 3º y 69.2 d 3º del Decreto 305,/2006, de aprobación del Reglamento de la Ley de Urbanismo.
- c) Subsidiariamente, por la irracionalidad e incoherencia de la delimitación del Sector del Plan Parcial, Pont Est, PPU-4.

**CUARTO.-** En la resolución de este recurso contencioso-administrativo resulta aconsejable alterar el orden en el que han sido expuestos por la actora los motivos que lo fundamentan, toda vez que, de prosperar el anunciado en segundo lugar, podría quedarse sin objeto el primero de ellos, en atención a la incidencia

que el resultado del estudio de inundabilidad y sus consecuencias en el planeamiento tuviera respecto de las bases del estudio económico financiero.

**QUINTO.-** Como se ha anticipado, la parte actora pretende la nulidad del POUM de Manlleu por omisión del estudio de inundabilidad.

La Disposición Transitoria 2ª, apartado 1º, del Decreto 305/2006, de 18 de julio, que aprobó el Reglamento de la Ley de Urbanismo, en la redacción que tenía a 25 de julio de 2007, establecía:

*Cuando no se disponga del correspondiente instrumento de planificación sectorial aprobado por la administración hidráulica competente que delimite las zonas inundables, el planeamiento urbanístico que incluya en su ámbito terrenos emplazados en zonas potencialmente inundables tiene que incorporar, como documento integrante del informe ambiental, un estudio de inundabilidad, que debe ser informado favorablemente por la administración hidráulica competente en el seno de la tramitación del plan.*

Por su parte, el artículo 9.2 del Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio, que aprobó el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo, recogió, como una de las directrices del planeamiento, que *está prohibido urbanizar y edificar en zonas inundables y en otras zonas de riesgo para la seguridad y el bienestar de las personas, salvando las obras vinculadas a la protección y la prevención de los riesgos.*

El POUM de Manlleu, objeto de recurso, se formó sin el estudio de inundabilidad, como así lo reconoce la Agencia Catalana del Agua en su informe de 15 de febrero de 2007 – documento 8 de la demanda –, según el cual, *“en la documentación del POUM falta un estudio de simulación hidráulica que evalúe este riesgo y que permita delimitar claramente la ocupación de los terrenos sometidos al riesgo de inundación y definir la ordenación y usos compatibles con esta condición, y, en su caso, las actuaciones de infraestructura hidráulica y las medidas de protección pasiva a adoptar a cargo de los sectores, según las*

*recomendaciones aprobadas por el Consejo de Administración del ACA, el 28 de junio de 2001, y modificadas el 17 de julio de 2003, y el contenido del artículo 6 del vigente Reglamento de la Ley de Urbanismo”.*

Pese a que la Agencia Catalana del Agua afirmó que ese estudio se había omitido, el Letrado de la Generalitat se opuso a la demanda, alegando que el informe de esa Agencia, de 15 de febrero de 2007, era el estudio de inundabilidad, y que, de conformidad con el artículo 161 de las Normas Urbanísticas del POUM, la gestión y ejecución de la tramitación del planeamiento derivado quedaba condicionada a la previa aprobación del Plan especial de infraestructura hidráulica.

También para el Ayuntamiento de Manlleu ese informe del ACA “*no deja de ser un estudio de inundabilidad*” en el que se establecen unas medidas a adoptar, incorporadas en la aprobación provisional del POUM, del siguiente tenor:

*“En la normativa se indicará que será necesario realizar un Plan Especial de Infraestructura Hidráulica, que será previo al desarrollo de los sectores próximos al río (PPU-6, PPU-7, PPU-8, PPU-9, PPU-13). Este PEIH tendrá que realizar un estudio hidráulico de detalle del comportamiento de la corriente de agua en los retornos del río y tendrá que determinar las medidas constructivas de protección pasiva a adoptar.*

*En la ficha de los sectores PPU-6, PPU-7-PPU8, PPU-9, PPU-13 se indicará que su tramitación queda condicionada a la previa aprobación del Plan Especial de Infraestructura Hidráulica y que tendrán que asumir las cargas del coste económico que les atribuya el PEIH, de acuerdo con las prescripciones del informe de la ACA.*

*En la ficha de los sectores PMU-3, PMU-5, y PMU-7 se indicará que su tramitación queda condicionada a la previa aprobación del Plan de Infraestructura Hidráulica y que deberán de fijar las diferentes tipologías edificatorias y*

*constructivas de las nuevas construcciones en función de los resultados del PEIH, de acuerdo con las prescripciones de la ACA...”*

Sin embargo, como se ha dicho, el informe de la ACA es claro al decir que en la documentación del POUM falta un estudio de simulación hidráulica que evalúe este riesgo y permita delimitar claramente la ocupación de los terrenos sometidos al riesgo de inundación y definir la ordenación y usos compatibles con esta condición, y, en su caso, las actuaciones de infraestructura hidráulica y medidas de protección pasiva – último párrafo de la página 6ª del informe del ACA. La omisión del estudio también aparece reconocida en la transcripción de la Memoria que se hace en la contestación a la demanda por el Ayuntamiento de Manlleu, diciendo que “..*este PEIH tendrá que realizar un estudio hidráulico de detalle del comportamiento de la corriente de agua en los retornos del río y tendrá que determinar las medidas constructivas de protección pasiva a adoptar*”.

El informe de la ACA no se hizo con un estudio de inundabilidad, que se omitió, sino, como se explica en el mismo, se hizo sobre la base de un documento de la propia Agencia, de 2003, de revisión de la “*Delimitación de las zonas inundables para la redacción del INUNCAT*”, del año 2001, respecto del cual afirmó que “*ni el objetivo ni la escala de trabajo eran adecuados como herramientas de planeamiento urbanístico*”.

No obstante lo cual, el informe recogió que “*los planos de delimitación de las zonas inundables del INUNCAT indican claramente que buena parte de los terrenos que conforman la parte interior de los meandros del cauce son inundables en las crecidas del río. De otro lado, la parte de la superficie ocupada por el núcleo urbano consolidado más próxima al río (extremo sur) resulta inundable con la avenida de 50 años de período de retorno tal y como se puede confirmar en diversas ocasiones del siglo pasado. En este lugar, la extensión de la avenida por la crecida de 500 años de recurrencia llega hasta la calle Canal, calle de Rusiñol y hasta la plaza Major (Ayuntamiento)*”.



Como antecedente, para comprender el alcance del riesgo de inundación, el informe explica que el curso del río Ter atraviesa el término municipal de Manlleu con un trazado meandriforme de 8'70 km de longitud. Además, que los cauces de los Torrentes de la Teularia, el Perer y el Magí, en sus tramos finales, atraviesan el núcleo urbano de Manlleu canalizados a cielo abierto o soterrados antes de confluir en un sólo curso que afluye al río Ter, con una superficie total en la confluencia con el Ter de 4'15 km<sup>2</sup>, de los que aproximadamente el 40% corresponde a terrenos urbanizados. A ellos se suma el Torrente de Poquí, que confluye con el río Ter en el extremo oeste del núcleo urbano de Manlleu.

El informe de la Agencia Catalana del Agua concluye que *"en cualquier caso, las propuestas de ordenación, zonificación y la definición de las rasantes de urbanización en los sectores PPU-6, PPU-7, PPU-8 y PPU-9 (PPU-4, Pont Est; PPU-5, Can Llanes; PPU-8, la Comella; PPU-9, El Dolcet, en la aprobación definitiva) confrontados con el cauce del río Ter, así como las limitaciones de uso del suelo no urbanizable que resulte del estudio de simulación hidráulica serán concordantes con las "Recomendaciones técnicas para los estudios de inundabilidad de ámbito local" de la Agencia Catalana del Agua de marzo de 2003, y la aplicación de los criterios técnicos aprobados por el Consejo de Administración de la ACA sobre la ocupación de los terrenos aprobación de los terrenos integrados en el sistema hídrico y las zonas inundables y las determinaciones de la directiva del artículo 6 del Reglamento de la Ley de Urbanismo."*

En relación con los *"sectores de desarrollo situados en terrenos de suelo urbano del margen izquierdo del río Ter (PAU-3, PAU-6, PMU-3, PMU-5, PMU-8 [PMU-7 Mejora Urbana Ter, en la aprobación definitiva]) están sometidos a una situación de riesgo hidrológico elevado para crecidas extraordinarias del río, de la misma manera que el extremo sur del núcleo urbano. Los documentos de planeamiento derivado deberán fijar las diferentes tipologías edificatorias y constructivas de las nuevas construcciones para adecuarlas al nivel de riesgo que*

*se determine con los resultados del estudio de simulación hidráulica que se redacte”.*

El reiterado informe también concluye que “los documentos de planeamiento derivado para el desarrollo de los sectores PPU-1, PPU-5 [SNU El Fugurull en la aprobación definitiva], PPU-7[PPU-5, Can LLanes, en la aprobación definitiva], PPU-8, PPU-11, PPU-12[PPU-6, Verdaguer 2, en la aprobación definitiva], sector de suelo urbanizable no delimitado el Fugurull, PMU-1, PMU-4, PAU-2, PAU-4, PAU-5, y PAU-7, en tanto en cuanto confronten con los cauces de diversos cursos naturales de drenaje o sus cauces discurren por el interior del sector, incluirán la determinación de los perímetros de la lámina de agua para caudales Q100 y Q500 con las condiciones de contorno actuales definidas por las edificaciones, obras de paso y muros de defensa existentes, y se relacionen las obras, si son necesarias, de nuevas estructuras de defensa o la renovación total o parcial de las existentes para la protección de las edificaciones en el tramo del eje de drenaje que confronta con cada sector”.

Como es de ver, ese informe condiciona el planeamiento derivado a los resultados de un estudio de inundabilidad en relación con los siguientes aspectos:

Ordenación, zonificación y rasantes, así como limitación de usos en suelo no urbanizable respecto de los PPU-4, PPU-5, PPU-8, PPU-9, previstos en el texto refundido del POUM.

Tipologías edificatorias y constructivas adecuadas al nivel de riesgo, que califica como elevado, respecto de los PAU-3, PAU-6, PMU-3, PMU-5, PMU-7 (PMU-8 en la aprobación inicial).

Perímetro de la lámina de agua para cauces Q100 y Q500, y relación de obras de estructuras de defensa, nuevas o renovadas, total o parcialmente, respecto de los PPU-7 (PPU-5 en la aprobación inicial), PPU-8, PPU-11, PPU-12

(PPU-6 en la aprobación inicial), sector del Fugurull, PMU-1 y PMU-4, PAU-2, PAU-4, PAU-5 y PAU-7.

**SEXTO.-** En el mismo informe de la Agencia Catalana del Agua, “se considera que, con carácter general, no resulta adecuado trasladar a las figuras de planeamiento derivado o estudios posteriores la delimitación de la compatibilidad entre el desarrollo urbanístico y el riesgo de inundación de los espacios que confrontan con los cursos fluviales importantes, como es el río Ter”.

Como se ha explicado, el trazado del río Ter por el término municipal de Manlleu tiene una longitud de 8'70 km, y a su paso por el núcleo urbano no afecta a un sector o ámbito, sino a muchos o a todos los que limitan con su cauce y con los cauces de los afluentes que confluyen en el mismo núcleo urbano, que aparecen relacionados en las conclusiones del informe del ACA, con distintas previsiones, incluyendo concretamente los sectores de los Planes Parciales de la aprobación inicial del POUM, PPU-1, PPU-5, PPU-6, PPU-7, PPU-8, PPU-9 y PPU-12; Planes de Mejora Urbana, PMU-1, PMU-3, PMU-4, PMU-5, PMU-8, y Polígonos de Actuación Urbanística PAU-2, PAU-3, PAU-4, PAU-5, PAU-6 y PAU-7.

Uno de los objetivos del estudio de inundabilidad requerido en el informe de la ACA es el de la determinación de los perímetros de la lámina de agua de los caudales Q100 y Q500 con las condiciones de contorno actuales definidas por las edificaciones, obras de paso y muros de defensa existentes, y la relación de obras, si son necesarias, de nuevas estructuras de defensa o la renovación total o parcial de las existentes para la protección de las edificaciones en el tramo del eje de drenaje que confronta con cada sector.

El estudio de inundabilidad para determinar las obras de defensa de protección de las edificaciones afecta a todos esos sectores y ámbitos, y las obras requeridas a resultas del mismo podrían tener su extensión.

En cualquier caso, el terreno necesario para esa infraestructura tiene el carácter de sistema general local e incluso supralocal - ya que podría afectar a otros municipios situados aguas arriba o abajo de Manlleu -, de conformidad con el apartado 1º del artículo 34 del Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio, que aprobó el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo, a tenor del cual, *"integran los sistemas urbanísticos generales los terrenos que el planeamiento urbanístico reserva para las comunicaciones, para los equipamientos comunitarios y para los espacios libres públicos, si su nivel de servicio es de alcance municipal o superior"*, añadiendo en su apartado 4º que *"el sistema urbanístico de comunicaciones comprende todas las infraestructuras necesarias para la movilidad de las personas y de las mercancías, por transporte terrestre, marítimo o aéreo, y comprende también las áreas de protección..."*.

El carácter de sistema general de las obras de encauzamiento de un río fue declarado así por esta misma Sala y Sección en sentencia 1.144/2009, de 4 de diciembre, dictada en el recurso ordinario número 564/2007, con cita y transcripción de las sentencias del Tribunal Supremo de octubre de 2002 (recurso de casación 10.690/1998, y de 28 de enero de 2003, recurso de casación 5102/1999, del tenor literal siguiente: *"son, pues, sistemas generales el conjunto de elementos fundamentales que integran la estructura general básica de la ordenación urbanística determinante del desarrollo urbano, constituidos por las comunicaciones y sus zonas de protección, espacios libres y zonas verdes, equipamientos comunitarios, redes arteriales, grandes abastecimientos, suministros de energía y otros análogos, que a nivel de Plan General, anulan o condicionan el uso lucrativo del suelo por los particulares a causa del interés general de la colectividad. Desde este planteamiento genérico la Sala no tiene dudas sobre la naturaleza de sistema general del encauzamiento de un río por su incidencia decisiva en el sistema de comunicaciones y por ser un elemento esencial de la estructura general del territorio, determinante del desarrollo urbano, por ser susceptible de constituir, por sí mismo, un elemento esencial de las*

*comunicaciones y por contener por mandato legal las zonas de protección a las que más arriba hemos aludido. A mayor abundamiento, el planeamiento que el acto impugnado ejecuta, califica las merитadas obras de sistema general, por lo que es insoslayable dicha naturaleza para la Administración actuante”.*

Como ya se dijo en esa sentencia, número 1144/2009, de 4 de diciembre, en relación con un plan especial, la estructura general del territorio, “*tal como establece el artículo 34.1 de la misma norma [Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio], está configurada por los sistemas generales que, según indica el mismo precepto, están integrados por los terrenos que el planeamiento urbanístico reserva para las comunicaciones, para los equipamientos comunitarios y para los espacios libres públicos, si su nivel de servicio es de alcance municipal o superior*”, por lo que se violaría el principio de jerarquía normativa entre planes si el planeamiento derivado del POUM de Manlleu que aquí se impugna afectara, como parece anticipar el informe de la ACA, los sistemas generales, pues la definición de la estructura general y el modelo de territorio es competencia y función de los planes de ordenación urbanística municipal (POUM) conforme a los artículos 57.2 c y 58.1.c del citado Decreto Legislativo 1/2005.

Como declaran las sentencias del Tribunal Supremo en el párrafo que se ha transcrito, los sistemas generales integran la estructura general básica de ordenación urbanística determinante del desarrollo urbano, que a nivel del Plan General, anulan o condicionan el uso lucrativo del suelo por los particulares a causa del interés general de la colectividad. Por ello no es de aceptar que se delimiten sectores con aprovechamiento privado, como se hace en el POUM impugnado, antes del estudio de inundabilidad y de la delimitación de los terrenos constitutivos del sistema general hidráulico, pues podrían ubicarse en terrenos inundables en los que está prohibida la urbanización y edificación a tenor de lo dispuesto en el artículo 9.2 del Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio, y/o ubicarse en terrenos necesarios para el sistema general.

El artículo 9.2 del Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio, que aprobó el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo, fija entre las directrices del planeamiento que *está prohibido urbanizar y edificar en zonas inundables y en otras zonas de riesgo para la seguridad y el bienestar de las personas, salvando las obras vinculadas a la protección y la prevención de los riesgos.*

Como garantía para evitar el incumplimiento de esa prohibición, el artículo 59.1 f) del mismo Decreto Legislativo 1/2005, dispone que los planes de ordenación urbanística municipal se formalizarán con *“la documentación medioambiental adecuada y, como mínimo, el informe medioambiental”*.

La Disposición Transitoria 2ª del Decreto Legislativo 305/2006, de 18 de julio, de aprobación del Reglamento de la Ley de Urbanismo de Cataluña, en la redacción vigente a la entrada del POUM en los servicios urbanísticos de la Generalitat de Cataluña – Disposición Transitoria 3ª del Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio -, concreta la documentación medioambiental necesaria en relación con la prohibición de urbanizar y edificar en zonas inundables, disponiendo en su apartado primero que, *“cuando no se disponga del correspondiente instrumento de planificación sectorial aprobado por la administración hidráulica competente que delimite las zonas inundables, el planeamiento urbanístico que incluya en su ámbito terrenos emplazados en zonas potencialmente inundables tiene que incorporar, como documento integrante del informe ambiental, un estudio de inundabilidad, que debe ser informado favorablemente por la administración hidráulica competente en el seno de la tramitación del plan”*.

El informe del ACA, de 15 de febrero de 2007, causa grave preocupación cuando afirma que *“los planos de delimitación de las zonas inundables del INUNCAT indican claramente que buena parte de los terrenos que conforman la parte interior de los meandros del cauce del río son inundables en las crecidas del río. De otro lado, la parte de la superficie ocupada por el núcleo urbano*

*consolidado más próxima al cauce del río (extremo sur) resulta inundable con la avenida de 50 años de período de retorno tal y como se pudo confirmar en varias ocasiones el siglo pasado".*

No cabe la menor duda que el POUM de Manlleu incluye zonas potencialmente inundables, por lo que, a fin de evitar la urbanización y edificación de esas zonas, era preceptivo incluir como *"documento integrante del informe ambiental, un estudio de inundabilidad, que debe ser informado favorablemente por la administración hidráulica competente en el seno de la tramitación del plan"*, lo que, por otra parte, y a esos fines, aconsejó el ACA en el reiterado informe, al decir que *"en la documentación del POUM falta un estudio de simulación hidráulica que evalúe este riesgo y que permita delimitar claramente la ocupación de los terrenos sometidos al riesgo de inundación, definir la ordenación y usos compatibles con esta condición y, si se da el caso, las actuaciones de infraestructura hidráulica y las medidas de protección pasiva ..."*.

Por todo ello, y por haberse incumplido los preceptos citados, procede estimar el recurso contencioso-administrativo y anular el POUM de Manlleu, a fin de que se retrotraigan las actuaciones al momento inmediato anterior a emitir el informe ambiental, a fin de que se realice el preceptivo estudio de inundabilidad, de conformidad con la Disposición Transitoria 2ª del Decreto 3005/2006, de 18 de julio, que aprobó el Reglamento de la Ley de Urbanismo.

**SÉPTIMO.-** El informe de la Agencia Catalana del Agua, de 15 de febrero de 2007, se remitió a un futuro estudio de simulación hidráulica para los sectores y ámbitos del POUM que se relacionan en el mismo, pero, respecto del sector del PPU-6 (PPU-4 en la aprobación definitiva del POUM) concluyó directamente que *"la delimitación del ámbito del sector PPU-6 no se fundamenta en ninguna determinación previa de las condiciones de inundabilidad de los terrenos. Con la información disponible se puede establecer que los terrenos delimitados por los canales de aducción y salida de la central hidroeléctrica y el margen derecho del*

*cauce están dentro del ámbito del sistema hídrico asociado al cauce principal del Ter y tienen un riesgo hidrológico alto. Consecuentemente, deben de segregarse del perímetro del sector urbanizable e incorporarse al sistema de espacios libres y zonas verdes o, mejor, de protección de la red hidrográfica”.*

Por lo que hace a ese sector, PPU-6 (PPU-4 en la aprobación definitiva), el informe ya había dicho que *“excepto la parte más elevada al lado del barrio de Vista Alegre, el resto de terrenos del sector PPU-6 son inundables por crecidas de entre 50 y 500 años de período de retorno”.*

Según el reiterado informe, de la superficie total de ese sector, el 48% sería inundable en un período de retorno de 500 años, y un 30% - también de la superficie total - en un período de retorno de 100 años, razón por la cual, en el informe se dice que *“...la delimitación de las zonas de uso privado del PPU-6 debería quedar sometida a los resultados de un estudio de detalle que permita establece los usos admisibles del terreno en función del nivel de riesgo hidrológico resultante”,* de ahí que concluya que los terrenos *deben segregarse del perímetro del sector urbanizable e incorporarlos al sistema de espacios libres y zonas verdes, o, mejor, de protección de la red hidroeléctrica”.*

Según la ficha del sector, éste tiene una superficie de 116.400 m<sup>2</sup>, de los cuales se reserva un 41'98 % para aprovechamiento privado, residencial e industrial, un 5% para equipamientos, y un 18'20% para viales, lo que supone un total de 65'18 %, inferior al 78% de la superficie total que según el informe del ACA, por remisión al INUNCAT, sería inundable en períodos de retorno de 100 y de 500 años.

Por ello, procede, además, estimar el recurso contencioso-administrativo respecto del sector PPU-4 (PPU-6 en el POUM aprobado inicialmente), Plan Parcial Pont Est, y declarar también la nulidad de la delimitación de este sector



por infracción del artículo 9.2 del Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio, de aprobación del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo.

**OCTAVO.-** No procede la condena al pago de las costas procesales causadas a los efectos de lo dispuesto en el artículo 139.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

### **FALLAMOS**

En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Sección Tercera) ha decidido:

**1º) ESTIMAR** el presente recurso contencioso administrativo interpuesto por la representación de D. José Colom Martí, contra los acuerdos de la Comisión Territorial de Urbanismo de Barcelona de 15 de noviembre de 2007 y de 30 de abril de 2008, por los que, respectivamente, se aprobó definitivamente el Plan de Ordenación Urbanística (POUM) de Manlleu, y se dio conformidad al Texto Refundido del referido POUM, publicados en el DOGC número 5174, de 16 de julio de 2008.

**2º)** Declarar la NULIDAD de la delimitación por el POUM de Manlleu del sector PPU-4 (PPU-6 en la aprobación inicial), "Plan Parcial Pont Est".

**3º)** ANULAR el POUM de Manlleu y ordenar que se retrotraiga todo lo actuado al momento anterior a emitir el informe ambiental, a fin de realizar el preceptivo estudio de inundabilidad, que deberá ser informado favorablemente por la administración hidráulica competente en el seno de la tramitación del plan, de conformidad con la Disposición Transitoria 2ª del Decreto 3005/2006, de 18 de julio, que aprobó el Reglamento de la Ley de Urbanismo.

**4º)** No efectuar especial pronunciamiento sobre las costas causadas.

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciendo saber que la misma no es firme, pudiendo interponerse frente a ella bien **recurso de casación ordinario**, siempre que pretenda fundarse en infracción de normas de Derecho estatal o comunitario europeo que sea relevante y determinante del fallo recurrido y hubiesen sido invocadas oportunamente en el proceso o consideradas por esta Sala, recurso que deberá prepararse ante esta misma Sala y Sección dentro de los diez días siguientes al de su notificación, mediante escrito en los términos establecidos en los artículos 88 y 89 de la ley jurisdiccional, bien **recurso de casación para la unificación de doctrina (autonómico)**, que deberá interponerse directamente ante esta misma Sala y Sección en el plazo de los treinta días siguientes al de su notificación, en los términos prevenidos en los artículos 99 y 97.

Firme que sea esta sentencia, solicítese del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Cataluña la publicación del fallo de esta sentencia en el Diario Oficial de la Generalitat, y que, hecho, remita a este Tribunal un ejemplar del Diario de la publicación para su incorporación a las actuaciones.

Así por esta Sentencia, de la que se unirá certificación a los autos, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

**PUBLICACIÓN.-** Leída y publicada la anterior sentencia por la Iltna. Sra. Magistrada Ponente, estando la Sala celebrando audiencia pública. Doy fe.



Concuerda bien y fielmente con su original al que me remito, y para que conste a los efectos oportunos, expido la presente en Barcelona, a veintidos de julio de dos mil quince

**LA/EL SECRETARIA/O JUDICIAL**



**Recurso Num.: 155/2015 RECURSO CASACION**

**Ponente Excmo. Sr. D. : Rafael Fernández Valverde**

**Secretaría de Sala: Ilma. Sra. Dña. María Teresa Barril Roche**

**TRIBUNAL SUPREMO**  
**SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO**  
**SECCIÓN: PRIMERA**

**AUTO**

**Excmos. Sres.:**

**Presidente:**

**D. José Manuel Sieira Míguez**

**Magistrados:**

**D. Jorge Rodríguez-Zapata Pérez**  
**D. Pedro José Yagüe Gil**  
**D. Rafael Fernández Montalvo**  
**D. Segundo Menéndez Pérez**  
**D. Rafael Fernández Valverde**  
**D. Octavio Juan Herrero Pina**

---

En la Villa de Madrid, a veintiuno de Mayo de dos mil quince.

**HECHOS**

**PRIMERO.**- Por el procurador Angel Quemada Cuatrecasas, en nombre y representación del Ayuntamiento de Manlleu, se ha interpuesto recurso de casación contra la sentencia de 29 de julio de 2014, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña –Sección Tercera-, en el recurso contencioso-administrativo número

384/08, sobre urbanismo. Comparece como parte recurrida el procurador Don Julián del Olmo Pastor, en nombre y representación de Don José Colom.

**SEGUNDO.-** Por providencia de 24 de febrero de 2015 se acordó se acordó conceder el plazo de diez días para que las partes formularan alegaciones sobre la posible concurrencia de la causa de inadmisión formulada por la parte recurrida en su escrito de personación.

Trámite que ha sido evacuado por la parte recurrente.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. **Rafael Fernández Valverde**,  
Magistrado de la Sala

### **RAZONAMIENTOS JURIDICOS**

**PRIMERO.-** La sentencia es del siguiente tenor literal: " 1º) *ESTIMAR* el presente recurso contencioso administrativo interpuesto por la representación de D. Onesimo , contra los acuerdos de la Comisión Territorial de Urbanismo de Barcelona de 15 de noviembre de 2007 y de 30 de abril de 2008, por los que, respectivamente, se aprobó definitivamente el Plan de Ordenación Urbanística (POUM) de Manlleu, y se dio conformidad al Texto Refundido del referido POUM, publicados en el DOGC número 5174, de 16 de julio de 2008. 2º) Declarar la NULIDAD de la delimitación por el POUM de Manlleu del sector PPU-4 (PPU-6 en la aprobación inicial), "Plan Parcial Pont Est". 3º) ANULAR el POUM de Manlleu y ordenar que se retrotraiga todo lo actuado al momento anterior a emitir el informe ambiental, a fin de realizar el preceptivo estudio de inundabilidad, que deberá ser informado favorablemente por la administración hidráulica competente en el seno de la tramitación del plan, de conformidad con la Disposición Transitoria 2ª del Decreto 3005/2006, de 18 de julio, que aprobó el Reglamento de la Ley de Urbanismo. 4º) No efectuar especial pronunciamiento sobre las costas causadas"

El fundamento de derecho tercero resume las pretensiones de la demanda: *"La parte actora pretende que se declare la nulidad del POUM de Manlleu por los siguientes motivos:*

- a) La evaluación económica del POUM es insuficiente por un cálculo superficial de los costes de urbanización y por prescindir del cálculo del precio y posible beneficio de la promoción inmobiliaria de los sectores y ámbitos que delimita, no justificando la viabilidad económica del POUM, con infracción de los artículos 59 1 e) del Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio, y 76.3 del Decreto 305/2006, de 18 de julio, por el que se aprobó el Reglamento de la Ley de Urbanismo.*
- b) Omisión del preceptivo informe de inundabilidad, a pesar del evidente riesgo de inundación del municipio, con infracción de los artículos 9.2 y 58 c) del Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio, y Disposición Transitoria 2ª y artículos 6 , 69.2 b 3º y 69.2 d 3º del Decreto 305./2006, de aprobación del Reglamento de la Ley de Urbanismo.*
- c) Subsidiariamente, por la irracionalidad e incoherencia de la delimitación del Sector del Plan Parcial, Pont Est, PPU-4.*

El último párrafo del sexto fundamento de derecho concluye *"Por todo ello, y por haberse incumplido los preceptos citados, procede estimar el recurso contencioso-administrativo y anular el POUM de Manlleu, a fin de que se retrotraigan las actuaciones al momento inmediato anterior a emitir el informe ambiental, a fin de que se realice el preceptivo estudio de inundabilidad, de conformidad con la Disposición Transitoria 2ª del Decreto 305/2006, de 18 de julio , que aprobó el Reglamento de la Ley de Urbanismo."*

Y el séptimo fundamento de derecho termina: *"Por ello, procede, además, estimar el recurso contencioso-administrativo respecto del sector PPU-4 (PPU-6 en el POUM aprobado inicialmente), Plan Parcial Pont Est, y declarar también la nulidad de la delimitación de este sector por infracción del artículo 9.2 del Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio , de aprobación del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo."*

**SEGUNDO.-** Siendo toda la fundamentación de la sentencia, como hemos reseñado- exclusivamente de derecho autonómico, el Ayuntamiento de Manlleu preparó recurso de casación anunciando que el escrito de interposición se articularía en motivos del art. 88.1.d. LJ por infracción: de la Disposición Transitoria Segunda apartado 1º de la ley 30/92, y de los artículos 2.3 del Código Civil, 9.3 CE y arts. 56 y 57 de la ley 30/1992.

Dicho escrito fue proveído en la providencia de 28 de noviembre de 2014 por la que tuvo por preparado el recurso de casación y emplazó a las partes ante el Tribunal Supremo.

Elevadas las actuaciones al Tribunal Supremo, en tiempo y forma, comparecen las partes litigantes en la instancia y así: la administración municipal formaliza su recurso de casación por infracción de los mismos preceptos que anunció en la fase preparatoria, y el recurrido se opone a la admisión del recurso de casación por *"fundarse únicamente en normas de derecho estatal meramente instrumentales"* que no han sido relevantes ni determinantes, de conformidad con los arts. 93.2.b y 93.4 LJ.

Concurre dicha causa de inadmisión.

El artículo 86.4 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, dispone que las sentencias que, siendo susceptibles de casación por aplicación de los apartados precedentes, hayan sido dictadas por las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia, sólo serán recurribles en casación si el recurso pretende fundarse en infracción de normas de Derecho estatal o comunitario europeo que sea relevante y determinante del fallo recurrido, siempre que hubieran sido invocadas oportunamente en el proceso o consideradas por la Sala sentenciadora, indicando el artículo 89.2 de la expresada Ley, a propósito del escrito de preparación, que en el supuesto previsto en el artículo 86.4 habrá de justificarse que la infracción de una norma estatal o comunitaria europea ha sido relevante y determinante del fallo de la sentencia.

En este caso el escrito de preparación del recurso no se ajusta a lo que dispone el artículo 89.2, toda vez que la infracción de los preceptos de la legislación estatal y constitucional era la primera vez que se alegaban en el proceso y constituye una invocación instrumental de preceptos estatales para cuestionar la interpretación de normas autonómicas: Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio y Decreto 305/2006, de 18 de julio, por el que se aprobó el Reglamento de la Ley de Urbanismo.

En definitiva, el recurso no pudo admitirse porque estamos ante un caso de interpretación y aplicación de Derecho autonómico, cuestión ésta en la que el Tribunal Superior de Justicia tiene la última palabra por ser, como ya se ha dicho en otras ocasiones, el supremo juez, (sentencia del Pleno de la Sala Tercera de 30 de noviembre de 2007, recaída en recurso de casación 7638/2002, así como SSTs de 26 de septiembre y 11 de diciembre de 2000), pues lo trascendente a los efectos que aquí interesan, como ya se ha dicho, es la norma aplicada, que en el caso de autos, es exclusivamente autonómica y la cita de la normativa estatal que efectúan la parte recurrente, tiene meramente carácter instrumental, ya que no es la norma de aplicación directa al presente supuesto.

No obstante a la anterior conclusión las alegaciones efectuadas por la parte recurrente en el trámite de audiencia concedido, pues las normas alegadas como infringidas no han sido alegadas por las partes, ni han sido objeto de aplicación, ni han sido las normas por la que ha transcurrido el debate planteado, ni tampoco relevantes y determinantes para el fallo de la Sentencia. El ayuntamiento recurrente reconoce implícitamente que las normas en las que funda su recurso de casación no fueron determinante del fallo que ahora recurre, al decir que la primera vez que se alegó la infracción de la Disposición Transitoria de la Ley 30/92 -sin citar el resto de las normas citadas en su recurso de casación-, fue en el escrito de conclusiones, olvidando que la infracción de artículos de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas constituyen un elemento común para todos los ordenamientos jurídicos, ya sea el estatal, autonómico o local y no pueden



servir por si solos para fundar un recurso de casación, cuando el derecho material, cuya interpretación por el órgano jurisdiccional se impugna, es puramente autonómico, pues, como señalan las sentencias de esta Sala de 31 de mayo de 2011 y 6 de marzo de 2003 (recursos de casación núm. 4768/2007 y 593/2006), admitir lo contrario sería tanto como privar de contenido al artículo 86.4 de la Ley Jurisdiccional al existir siempre la posibilidad de acogerse a estos preceptos instrumentales y principios generales para, con base en su infracción, entablar el recurso de casación para que, en el caso que nos ocupa, al socaire de las infracciones denunciadas, interprete esta Sala el mentado Texto Refundido autonómico, cuando reiteradamente hemos declarado su improcedencia (Sentencias de 4 de mayo de 2000 --recurso de casación nº 8409/1994--, de 23 de enero de 2001 --recurso de casación nº 9155/95--, de 19 de julio de 2001 --recurso de casación nº 2983/1996--, de 26 de julio de 2001 --recurso de casación nº 8858/1996--, de 15 de octubre de 2001 --recurso de casación nº 3525/1996--, de 14 de noviembre de 2002 --recurso de casación nº 11120/1998--, de 29 de mayo de 2003 --recurso de casación nº 759/1999--, entre otras).

Todo lo cual nos lleva a declarar la inadmisibilidad del recurso por cuanto la sentencia impugnada, para llegar a la conclusión finalmente alcanzada sólo interpreta y aplica derecho autonómico.

**TERCERO.-** Al ser inadmisile el recurso de casación, las costas procesales causadas deben imponerse a la parte recurrente, como dispone el artículo 93.5 de la Ley Jurisdiccional. Si bien la Sala, haciendo uso de la facultad que le otorga el artículo 139. 3 de la LRJCA, fija en 1500 euros la cantidad máxima a reclamar por la parte recurrida y por todos los conceptos en ambos casos.

Por lo expuesto,

**LA SALA POR UNANIMIDAD ACUERDA:** Declarar la inadmisión del recurso de casación interpuesto por Ayuntamiento de Manlleu contra la sentencia de 29 de julio de 2014, dictada por la Sala de lo Contencioso-

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña -Sección Tercera-, en el recurso contencioso-administrativo número 384/08, resolución que se declara firme, con imposición a la parte recurrente de las costas procesales causadas en este recurso, en los términos expresados en el último razonamiento jurídico.

Lo mandó la Sala y firman los Magistrados Excmos. Sres. al inicio designados

Las anteriores FOTOCOPIAS SELLADAS RUBRICADAS  
CON EL VALOR DE INSERCIÓN DE CADA UNA DE ELAS Y DE LA PRESENTE  
RESOLUCIÓN, A PARTIR DEL DÍA DE SU EMISIÓN Y EXPIRO LA PRESENTE  
RESOLUCIÓN QUE PROCEDAN  
DE LA UNIDAD A treinta de Junio de 2015.

